



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

DEMANDANTE:	MARÍA DEL PILAR MAYA SERNA.
DEMANDADO:	COLPENSIONES y otros.
TIPO DE PROCESO:	ORDINARIO.
DECISIÓN:	CONFIRMA.

En la fecha, El **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, se reunió para revisar la Consulta en favor de Colpensiones, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora **MARÍA DEL PILAR MAYA SERNA**, en contra de **COLPENSIONES, CARMENZA DEL SOCORRO SERNA ESCOBAR, ALEJANDRO MAYA FRANCO** y **CARLOS EDUARDO MAYA FRANCO**, estos tres últimos en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos de la sustitución de poder obrante a folio 202 del expediente, se reconoce personería para actuar en representación de COLPENSIONES, al abogado Edwin Alejandro Acevedo García, con Tarjeta Profesional 168.254 del C.S. de la J.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

COLPENSIONES.

Solicita que se revoque la sentencia de instancia, se declaren probadas las Excepciones propuestas y se absuelva a la demandada de todas las pretensiones. Dice que el señor ANTONIO JOSE MAYA ARANGO falleció el 16 de septiembre de 2007, en razón a lo cual se les reconoció la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios CARMENZA DEL SOCORRO SERNA ESCOBAR, MARIA DEL PILAR MAYA SERNA y ALEJANDRO MAYA FRANCO, así como a CARLOS EDUARDO MAYA FRANCO en calidad de hijo discapacitado del causante, pero a éste último a partir del mes de enero de 2011, en cuantía de \$1.343.420, suma que en idénticas circunstancias quedó a favor de la demandante y del señor ALEJANDRO MAYA FRANCO; por lo que no hay lugar a que la entidad se abstenga de continuar descontando de la mesada pensional de la actora suma

de dinero alguna, ya que existe otro hijo del causante que en idénticas circunstancias acreditó la calidad de beneficiario; por lo que el Juzgado de conocimiento no debió condenar a la devolución de la suma de \$29.428.650 debidamente indexada en favor de la aquí demandante, habida cuenta que el valor de la mesada pensional fue repartida por partes iguales a los hijos del causante.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES:

- Condenar a la demandada a abstenerse de efectuar deducciones de la mesada pensional de la demandante como beneficiaria de la sustitución pensional de su padre Antonio José Maya Arango; a reajustar su mesada pensional en forma retroactiva a partir del 1 de febrero de 2011; y la indexación de los valores que resulten de la condena impuesta.

HECHOS:

- Que el 16 de septiembre de 2007 falleció su padre, el cual se encontraba pensionado por vejez desde el 22 de febrero del mismo año. Que la compañera permanente y 2 de los hijos del causante (María del Pilar y Alejandro), el 17 de diciembre de 2007 solicitaron la sustitución pensional, la cual les fue reconocida mediante Resolución 010096 del 24 de abril de 2009, en una proporción del 50% para la primera y 25% para cada uno de los hijos, reconociéndose a la demandante un retroactivo de \$42.053.334.
- Que a partir del 2011, la demandada le comenzó a hacer descuentos de su mesada pensional en cuantía de \$588.573, argumentando que mediante Resolución 7276 de 2010, se modificó la referida Resolución de reconocimiento pensional, incluyendo como beneficiario a Carlos Eduardo Maya Franco en calidad de hijo discapacitado del causante, ordenando descontar a la demandante la referida suma de dinero durante 50 cuotas, sin modificar el valor de la mesada pensional de los demás beneficiarios y afectando unilateralmente su derecho adquirido.

CONTESTACIÓN.

COLPENSIONES. Se opuso a las pretensiones.

- Admitió los hechos de la demanda aclarando que el derecho pensional se reconoció con base en las pruebas presentadas en su momento, presentándose con posterioridad otro solicitante que demostró su calidad de hijo inválido del

causante, redistribuyéndose la prestación conforme a la normatividad vigente, sin ser cierto que se haya actuado arbitrariamente.

- Excepciones de mérito: inexistencia de la obligación, inexistencia del derecho a reajustar la mesada pensional, cumplimiento de un deber legal, buena fe de Colpensiones e imposibilidad de condena en Costas.

CARMENZA DEL SOCORRO SERNA ESCOBAR.

- Excepciones de fondo: imposibilidad de afectar derechos pensionales adquiridos, buena fe e imposibilidad de condena en Costas.

ALEJANDRO MAYA FRANCO y CARLOS EDUARDO MAYA FRANCO no presentaron escrito de contestación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Condenó a COLPENSIONES que dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, pague a la demandante la suma de \$29.428.650 por concepto de lo deducido de la mesada pensional de sobrevivientes; la indexación sobre tal suma de dinero y las Costas Procesales.

Dijo la A-quo que el Código Contencioso Administrativo establece la inmutabilidad de los Actos administrativos, por lo que las entidades públicas no pueden revocar unilateralmente los mismos, sino que en caso de no contar con el consentimiento del afiliado para revocarlos, está en la obligación de demandarlos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y que como en el caso de autos no se acreditó que la demandante haya autorizado o consentido la deducción, la misma se torna arbitraria, siendo procedente el reintegro de los dineros descontados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Competencia:** Consulta. Artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S. "...también serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante...", como es el caso de Colpensiones.
- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, hizo bien o no el A-quo en ordenar a la demandada el reintegro de los dineros deducidos a la demandante de su mesada pensional, en cuantía total de \$29.428.650; y la indexación de la condena. Veamos:

Está demostrado con la copia de la Resolución 010096 del 24 de abril de 2009, que la demandada le reconoció a Carmenza del Socorro Serna Escobar -compañera permanente del causante-, a la demandante, y a su hermano Alejandro Maya Franco -hijos del causante-, la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Antonio José Maya Arango, a partir del 16 de septiembre de 2007, en cuantía mensual de \$6.944.392, distribuida en un

50% para la compañera permanente y un 25% para cada uno de los referidos hijos, reconociéndole a la actora un retroactivo pensional de \$42.053.334 -fls 17 a 20-.

Igualmente se tiene probado que mediante Resolución 7276 del 6 de diciembre de 2010, la entidad modificó la referida Resolución de reconocimiento pensional, incluyendo como beneficiario de la prestación a Carlos Eduardo Maya Franco, en calidad de “hijo discapacitado del causante”, redistribuyendo el valor de la pensión a partir del 1 de enero de 2011; otorgándole a cada uno de los hijos beneficiarios, la suma de \$1.343.420, equivalente al 16.6% del valor total de la pensión mensual, y disponiendo en el párrafo segundo de la referida Resolución: “descontar de la mesada pensional correspondiente a MARÍA DEL PILAR MAYA SERNA, la suma de \$29.428.684, en 50 cuotas de \$588.573” -fls 29 a 31-.

DESCUENTO DE SUMAS PAGADAS EN EXCESO O MAYOR VALOR.

Por regla general, tal como lo concluyó la juez de instancia, cuando un acto administrativo ha reconocido un derecho de carácter particular y concreto, no puede ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Así lo establece el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011:

ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. (subraya fuera de texto).

No obstante, en materia de Seguridad Social existe norma propia que regula el tema, esto es, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, que en su tenor literal establece:

“REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes. (Subraya propia).

La Corte Constitucional en Sentencia C-835 de 2003, declaró la exequibilidad condicionada de la aludida norma y en la Sentencia de Unificación 182 del 8 de mayo de 2019, Magistrada Ponente, Diana Fajardo Rivera, consideró que “una de las excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral ocurre justamente en el marco del sistema pensional”, toda vez que el referido artículo 19, le concede a las entidades de seguridad social la competencia para revocar unilateralmente pensiones irregulares, siempre que se cumpla con algunas exigencias. Así lo manifestó:

“...En síntesis, desde la Sentencia C-835 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido inequívocamente la revocatoria unilateral frente a pensiones irregulares. Posición que también es compartida por el Consejo de Estado. En la actualidad, no se discute que una pensión obtenida por medios ilegales o en abierto incumplimiento de los requisitos, al punto de entrar en la órbita del derecho penal, pueda ser revocada sin el consentimiento del interesado...”

A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores, se concluye que es necesario precisar el alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, así como reiterar los principios y criterios trazados por la Sentencia C-835 de 2003; y complementarlos para superar las diferencias que se han producido entre las salas de revisión, de la siguiente manera:

- (i) ***Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título.***
- (ii) ***La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber.*** Las administradoras de pensiones o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, no solo están facultadas, sino que es su deber verificar de oficio, el cumplimiento de los requisitos para la adquisición de un derecho prestacional. Sin embargo, mientras no surjan nuevos motivos o causas fundadas de duda, no puede la administración reabrir periódicamente investigaciones que afecten derechos adquiridos, y propicien escenarios injustificados de inseguridad jurídica.
- (iii) ***Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado.***
- (iv) ***No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la pensión.***
- (v) ***Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios.***
- (vi) ***Sujeción al debido proceso.*** La administración o autoridad competente no puede suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido proceso que garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la prueba recae sobre la administración a quien corresponde desvirtuar la presunción de buena fe que cobija al pensionado. Durante el mismo, debe prestarse especial atención a los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción. Frente a una “*censura fundada*” de la administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.
- (vii) ***El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la historia laboral.***
- (viii) ***El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse como un escenario puramente adversarial.***
- (ix) ***Efectos de la revocatoria.*** La revocatoria directa solo tiene efectos hacia el futuro (*ex nunc*). La administración **no puede recuperar los dineros que haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que ocasionó un acto administrativo contrario a derecho.** (subraya fuera de texto).

- (x) ***Alcance de la revocatoria y recurso judicial.*** La revocatoria unilateral es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración. Esta no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los particulares podrán acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a un reconocimiento pensional.

Conforme a lo expuesto, si bien es cierto el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 permite la revocatoria directa del acto administrativo por parte de las entidades de Seguridad Social aun sin el consentimiento del particular, cuando se compruebe el incumplimiento de los requisitos para el reconocimiento del derecho, la Corte Constitucional en la SU182 del 8 de mayo de 2019, refiriéndose a tal norma sostuvo que pueden y deben revocar unilateralmente el acto administrativo; siendo enfática dicha Corporación en puntualizar que los efectos de tal decisión solo rigen hacia el futuro, es decir que, en ejercicio de la acción revocatoria no puede mutuo propio descontar los dineros que haya girado, puesto que para tales eventos debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

En el presente asunto, de la ya referida Resolución de reconocimiento pensional -fls 17 a 20- y de la comunicación BZ2019_9454514 del 17 de julio de 2019, expedida por la Directora de Nómina de Pensionados de la demandada en respuesta al oficio 470 de 2019 -fls 174 a 183-, se desprende que dada la modificación del porcentaje que le correspondía a cada uno de los hijos beneficiarios -16.6%-, a la demandante se le pagó por la entidad demandada un mayor valor pensional de \$29.790.492, entre el 16 de septiembre de 2007 -fecha de fallecimiento del causante fl 11- y el 31 de diciembre de 2010.

Igualmente, está acreditado con la referida comunicación, que en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo segundo de la Resolución 7276 del 6 de diciembre de 2010, referida al inicio de estas consideraciones, la demandada le descontó a la demandante entre el mes de enero de 2011 y febrero de 2015, un total de \$29.428.650, a título de “descuentos terceros”.

Por lo anteriormente expuesto, si bien Colpensiones podía legítimamente revocar o modificar el acto administrativo de reconocimiento pensional, lo que no podía hacer motu proprio, era descontar a la aquí demandante, los dineros girados en exceso por valor total de **\$29.428.650**; o dicho de otra manera, debió contar con el consentimiento de la beneficiaria demandante para efectuar los descuentos del mayor valor pagado a esta, o en caso contrario, acudir al juez administrativo a fin de obtener autorización para proceder a hacerlo, pero como aún no lo ha hecho, a esta Sala no le queda otra alternativa que ordenar el reintegro de dicha suma de dinero. **CONFIRMA.**

INDEXACIÓN DE LA CONDENA.

Como quiera que la devaluación de la moneda constituye un hecho notorio en el mercado colombiano, es procedente la actualización de la condena impuesta, ya que esta aún no

ha ingresado al patrimonio de la demandante y cuando lo haga se habrá visto envilecida por la pérdida del poder adquisitivo en el mercado, lo anterior, con base en la fórmula consistente en dividir el índice final sobre índice inicial x capital – capital. **CONFIRMA**

Sin Costas Procesales en esta Instancia, las cuales no se causaron al conocerse del proceso en Consulta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el 18 de noviembre de 2019, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **MARÍA DEL PILAR MAYA SERNA**, en contra de **COLPENSIONES, CARMENZA DEL SOCORRO SERNA ESCOBAR, ALEJANDRO MAYA FRANCO** y **CARLOS EDUARDO MAYA FRANCO**, estos tres últimos en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva; conforme a lo expuesto en parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin Costas Procesales en esta Instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Los magistrados;



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

SALVAMENTO DE VOTO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° **054** de abril 05 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>